RECOMENDACIÓN No. 36/2020

Síntesis: Una persona interna en el CE.RE.SO. Número 1 de Aquiles Serdán, Chihuahua manifestó haber sido detenida en compañía de su familia por parte de elementos de la Policía Ministerial, quienes lo torturaron y retuvieron a su concubina e hijos en un hotel para interrogarlos.

Conforme a la investigación realizada, este organismo concluyó que existen evidencias suficientes para determinar que fueron violentados los derechos humanos del quejoso, específicamente el derecho a la integridad y seguridad personal.

*“2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo”
“2020, Año de la Sanidad Vegetal”*

Oficio No. CEDH:1s.1.113/2020

Expediente No. **ZBV-138/2019**

RECOMENDACIÓN: CEDH:5s.1.036/2020

Visitadora Ponente: Zuly Barajas Vallejo
Chihuahua, Chih., a 14 de diciembre de 2020

**MTRO. CÉSAR AUGUSTO PENICHE ESPEJEL
FISCAL GENERAL DEL ESTADO**

P R E S E N T E.-

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en relación a la queja presentada por “**A**”¹, radicada bajo el número de expediente **ZBV-138/2019**; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, párrafo tercero, inciso A, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con los numerales 3 y 6, fracciones I y II, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como 6 y 12, del Reglamento Interno de esta Comisión, procede a resolver lo conducente, según el estudio de los siguientes:

I.- ANTECEDENTES

1.- En fecha 14 de marzo de 2019, la licenciada Ethel Garza Armendáriz, en su carácter de visitadora adscrita al Área de Seguridad Pública y Centros de Reinserción Social de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 6 fracción II inciso a), 16 y 29 de la Ley

¹ Por razones de confidencialidad y protección de datos personales, este organismo considera conveniente guardar la reserva de los nombres de algunas de las personas que intervinieron en los hechos, así como otros datos que puedan llevar a su identificación, los cuales se hacen del conocimiento de la autoridad mediante un documento anexo. Lo anterior con fundamento en los artículos 4, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 8, del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 3, fracción XXI, 68, fracción VI, 116, párrafos primero y segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 6, 7, 16, 17, 18, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3, 16 y 171, fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, y demás aplicables, y de conformidad al Acuerdo de Clasificación de Información que obra dentro del expediente de queja en resolución.

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y 78 de su Reglamento Interno, levantó un acta circunstanciada en la cual asentó los siguientes hechos manifestados por “A” en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Estatal número 1 de Aquiles Serdán, Chihuahua:

“...Fui detenido el día 27 de febrero, en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, aproximadamente a las 14:00 horas, por agentes de la policía ministerial, por el S-Mart de la calle Tecnológico, andaba en compañía de mi esposa y de mis hijos, cuando llegué a un cajero dentro de S-Mart y de ahí fui detenido por varios agentes que se me cerraron y me empezaron a golpear, de ahí me llevaron a una casa sin saber a dónde, primero porque no conozco esta ciudad y luego porque me taparon la cara, ahí estuve como veinte minutos o media hora y de ahí luego fueron a reventar otra casa los agentes, de ahí me llevaron a Fiscalía Zona Centro, me amenazaron con que me iban a matar al igual que a mi familia, que al cabo no me conocían, cuando fuimos a la casa que menciono que no conocía, me golpearon en las costillas, traigo mucho dolor, me dan punzadas, me siento sofocado y me falta aire al respirar, no supe con que me golpearon porque me tenían con los ojos tapados; sé que mi esposa está en el hotel, creo que se llama “B” sobre la Tecnológico, frente al hotel está una paquetería exprés, esas referencias me las da mi esposa; con mi señora están mis hijas: “C”, “D”, “E” y mi hijo “F” de ocho años, al momento de la detención se lo entregaron a mis suegros en Fiscalía, ella se quedó con las niñas custodiada en la habitación del hotel que menciono por tres agentes ministeriales. Por lo que presento esta queja a fin de que se me apoye por parte de este organismo a investigar los hechos, ya que fui golpeado por diversos agentes y no sé cómo se encuentre mi familia...” [sic].

2.- En fecha 17 de abril de 2020,² se recibió informe de autoridad mediante el oficio número FGE-18S.1/1/349/2020, signado por el maestro Jesús Manuel Fernández Domínguez de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, en el cual manifestó lo siguiente:

“...I.1. HECHOS MOTIVO DE LA QUEJA.

Del contenido del escrito de queja, se desprende que los hechos motivo de la misma, se refieren a alegados actos relacionados con la supuesta violación

² No pasa desapercibido para esta Comisión que el informe se rindió 388 días después de la primera solicitud de informes (28 de marzo de 2019)

a la integridad y seguridad personal, en específico los consistentes en tortura, al referir “A”, que el 27 de febrero de 2019 aproximadamente a las 14:00 horas, lo detuvieron en la cadena comercial S-Mart agentes de la policía ministerial, luego lo trasladaron a una casa en donde lo golpearon en las costillas, posteriormente lo llevaron a la Fiscalía Zona Centro; señala que lo amenazaron con matar a su familia y que su esposa e hijos estaban custodiados, en la habitación del hotel “B” por tres agentes ministeriales.

En este sentido, el presente informe se concentra, exclusivamente en la dilucidación de estos hechos, en consonancia con lo solicitado por el garante local y lo establecido en la Ley y Reglamento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

I.2. ANTECEDENTES DEL ASUNTO.

De acuerdo con la información recibida por parte de la Agencia Estatal de Investigación, la Fiscalía de Distrito Zona Centro, la Dirección de Inspección Interna de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación; y la autoridad penitenciaria, relativa a la queja interpuesta por “A”, se informan las actuaciones realizadas por la autoridad:

1.- De la información remitida por parte del agente del Ministerio Público encargado del Departamento Jurídico de la Agencia Estatal de Investigación, se desprende parte informativo elaborado por policías de investigación de dicha corporación, en el cual se establece lo siguiente:

“Por medio del presente los suscritos oficiales “G”, “H” e “I”, agentes adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, nos permitimos informar a usted que el día de hoy 27 de febrero de 2019, al andar realizando diligencias de investigación de los hechos en donde perdieran la vida “J” y “K”, esto dentro del número de expediente “L”, siendo las 13:00 horas nos constituimos en la Dirección de Seguridad Pública Municipal ubicada en la Avenida Homero número 500, lugar en el cual solicitamos nos permitieran el acceso a las cámaras de Escudo Chihuahua con el fin de localizar el vehículo Nissan Tsuru de color negro con placas de circulación “M”, el cual había participado en los hechos que nos ocupan y que había sido localizado y asegurado el día de ayer alrededor de las 23:00 horas en las calles Teófilo Borunda y Artículo 123 de la colonia Centro de esta ciudad, en el cual se localizaron casquillos calibre .223 y 9mm, y con ello saber quiénes habían abandonado dicho vehículo e identificar a las personas agresoras, por lo que nos permitieron el acceso y con ayuda del encargado

de Escudo Chihuahua, el policía segundo "II", en la cámara ubicada en la avenida Ocampo se logró localizar al vehículo antes descrito el día 26 de febrero a las 13:10 horas y al observar dichas cámaras se puede deducir que del vehículo en mención descienden tres personas del sexo masculino, en el lugar duran algunos minutos, y luego se observa que arriba un vehículo Sentra de color gris y al parecer los tres sujetos abordan dicho vehículo, por lo que se hace el seguimiento por las videocámaras de este último automotor en las cámaras (lectoras de placas) que se ubican entre las calles Tecnológico y en la avenida Vallarta siendo las 13:32 horas se logra ubicar el vehículo, el cual se detecta tiene placas de circulación "N" por lo que el segundo "II", ingresa el número de placa al sistema de Escudo Chihuahua, arrojando que ese vehículo, el día de ayer 26 de febrero poco antes de los hechos en donde perdieron la vida ambas víctimas, pasa por el lector de placas que se ubica en la calle Silvestre Terrazas, manifestándonos el segundo "II" que se encontraban analizando los videos y en cuanto tuvieran el reporte oficial nos los harían llegar, por lo que al tener indicios de la participación de este vehículo en los hechos, ya que como se indicó, es en el que se observa que abordan los diversos sujetos que descienden del vehículo Tsuru negro, posteriormente de realizado el hecho, además por haberse detectado que circula cerca del lugar y a la hora que se realizara el homicidio, es por lo anterior que se da aviso a los diversos compañeros de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida y se inicia la búsqueda de dicho automotor consistente en un vehículo Sentra de color gris con placas de circulación "N", para su aseguramiento, ya que en él pueden andar a bordo las personas que participaron en el evento delictivo, por lo que al andar en búsqueda del vehículo antes mencionado, en esta fecha, los suscritos quienes realizábamos la búsqueda por el norte de la ciudad logramos ubicar el automotor, Sentra color gris con placas de circulación "N", siendo las 16:56 horas, el cual circulaba sobre la avenida Tecnológico y casi Homero, en dirección de sur a norte, por lo que le marcamos el alto con comandos sonoros y luminosos, sin embargo al observarnos el conductor, acelera su marcha, de nueva cuenta mediante comandos sonoros y verbales se le indica que pare su marcha, haciendo caso omiso, avanza por debajo del puente de la intersección de la avenida Tecnológico y Homero, dando vuelta en "U", por lo que seguimos, el vehículo ingresa al estacionamiento de S-mart Juventud, dándole alcance, y al no detener su marcha pese a las indicaciones de detenerse, como se dijo con comandos sonoros, luminosos y alta voz, fue necesario cerrarle el paso, logrando que se detuviera, descendiendo los suscritos de la unidad y acercándonos al vehículo, en el cual se logra observar del lado del piloto a una persona del sexo masculino y del lado del copiloto a una persona del sexo femenino, además se observan cuatro

menores de edad en el asiento trasero del vehículo, identificándonos en ese momento como agentes de la policía investigadora e indicándole que se realizaba una investigación en la cual al parecer había participado el vehículo el cual él conducía, por lo que se les solicita que desciendan del vehículo, negándose a bajar, indicándole nuevamente la razón del porqué les solicitamos detuviera su marcha, y pidiéndole nuevamente con comandos verbales descienda del vehículo y se identificaran, finalmente acceden ambos, bajan del automotor, identificándose la persona masculina como “A” así como la fémina dijo llamarse “O” indicando que los menores son sus hijos, por lo que les informamos de nueva cuenta que se tenía información que dicho vehículo probablemente participó en la comisión de un hecho delictivo y ante la actitud evasiva que tuvo al omitir detenerse ante las señales de unos servidores, acelerar y no querer descender del vehículo en un primer momento, es que se le indica que por seguridad se les realizaría una revisión superficial, localizándole a la persona masculina en la bolsa derecha de su pantalón cuatro envoltorios en bolsa trasparente que contiene sustancia en polvo blanco, con características propias de la cocaína, en la diversa bolsa, un teléfono celular marca Huawei, color negro, respecto a la fémina se solicitó la presencia de la compañera agente “P”, quien le realiza un revisión superficial no localizándole objeto de peligro o ilícito, por todo lo anterior además se les informa se les realizaría una inspección al vehículo ya que podría haber armas de fuego u objetos relacionados con el homicidio, así como debajo del asiento del conductor, una bolsa trasparente con sellos Ziploc que contiene hierba seca, verde y olorosa con características de la marihuana por lo que al cuestionarle del polvo blanco y la hierba seca, verde olorosa con características de la marihuana al conductor, éste refirió de manera nerviosa que era de él, ya que él es el consumidor y que había comprado ambas drogas para él, por lo anterior es que en este momento al estar estas sustancias en el radio de disponibilidad del masculino, es que se procede a su detención, informándole a “A”, que quedaba detenido por el delito contra la salud, en su variante de posesión simple de narcótico, leyéndole sus derechos a las 17:01 horas, realizando el aseguramiento de las sustancias, teléfono celular Huawei negro, así como el vehículo automotor, Nissan Sentra color gris con placas de circulación “N”, en el cual cabe señalar que se localizaron 11 tarjetas que se aprecian nuevas con chip de la compañía Telcel, localizando en la parte central del tablero, un teléfono celular color dorado marca “Hisence” y diversos tickets de compras los cuales también son asegurados, posteriormente nos trasladamos a las oficinas de la Fiscalía Zona Centro para la revisión médica de la persona detenida y ponerla a disposición del Ministerio Público, así mismo, se hace del conocimiento que se trasladó a la fémina y a los cuatro menores de edad a

las instalaciones de la Fiscalía General del Estado a efecto de garantizar su seguridad y realizar diligencias relacionadas a las investigaciones. Así como la elaboración del presente narrativo, no omito informarle que nos fue proporcionado por el segundo “II” de la Dirección de Seguridad Pública Municipal el análisis de las cámaras del día del hecho, el cual se anexa, sin más que informar”.

Además, en cuanto a lo señalado por el quejoso en su escrito, referente a que su esposa se encontraba en un hotel custodiada por tres agentes ministeriales, la autoridad informa que se tenía conocimiento de que por parte del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Contra la Vida, “O” contaba a solicitud de ella misma, con custodia por parte de oficiales de la Agencia Estatal de Investigación con carácter de testigo protegido dentro de la carpeta de investigación, por lo que se le brindaron las medidas de protección y resguardo temporal en un hotel de la ciudad, señalando que en ningún momento fue en contra de su voluntad, sino que permaneció en dicho sitio hasta que decidió retirarse, renunciando a las medidas de protección que se le brindaban por parte de la Fiscalía General del Estado.

2.- Respecto de la información proporcionada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos contra Narcomenudeo, se desprende que en relación a lo anteriormente descrito, a las 18:15 horas del 27 de febrero del 2019, “A” fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Salud y Narcomenudeo, toda vez que se le detuvo dentro del término legal de la flagrancia, como probable responsable en la comisión del delito contra la salud en la modalidad de posesión simple de narcótico; por lo que una vez analizadas las circunstancias en que llevó la detención, el Ministerio Público ordenó la retención de “A”, iniciándose la carpeta de investigación registrada bajo el número “Q”, en contra del quejoso.

Dentro de la carpeta se cuenta con un informe de integridad física, realizado a “A” por la médico legista a las 17:30 horas del día en mención, en el cual se concluye que el detenido presentaba sigilaciones (chupetones de 2 días de evolución) en región lateral derecha en la parte inferior del cuello, señalando el quejoso que tenía dolor en tobillo pues se torció el pie al pisar mal la banqueta cuando llegó a dicha dependencia; así mismo, se emite informe de integridad física de egreso de Fiscalía en fecha 01 de marzo del 2019, en el cual se determina que “A” no presentaba huellas de violencia física recientes al momento de su exploración.

También obra dentro de dicha carpeta, el acta de inventario de aseguramiento, en la que se establece que tras una inspección en la persona de “A”, se encontró en el bolsillo derecho de su pantalón, una bolsa de plástico transparente que en su interior contenía cuatro envoltorios con un polvo blanco y fino con las características de la droga conocida como cocaína, además en el vehículo tripulado por el quejoso se localizó una bolsa con sello Ziploc que en su interior contenía una hierba verde seca y olorosa con las características de la droga conocida como marihuana, firmando dicha acta el policía de investigación y el detenido; asimismo se cuenta con la respectiva cadena de custodia de tales objetos.

Por otra parte, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Delitos Contra la Vida, mediante tarjeta informativa comunicó que en virtud del hecho ocurrido el 26 de febrero de 2019, en el que perdieran la vida de manera violenta “J”, director de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Cuauhtémoc, y el agente de la misma corporación “K” se inicia la carpeta de investigación registrada bajo el número “L”, por el delito de homicidio. A raíz de la investigación se tuvo conocimiento de que los agresores al momento del ataque a las víctimas tripulaban un vehículo Nissan, de la línea Tsuru, modelo 1994, color negro mate, con placas de circulación “M”, y que una vez ocurrido el suceso abandonan dicho automóvil y los recoge un vehículo diverso, de la marca Nissan, línea Sentra, modelo 2000, con placas de circulación “N”, a bordo del cual se retiran del lugar. Un día después de los hechos se pudo dar con la ubicación del vehículo Sentra, en el cual viajaba “A”, a quien tras realizarle una inspección en su persona y en el automóvil que tripulaba, se le localizaron diversos narcóticos, por lo que fue detenido en flagrancia y puesto a disposición de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Narcomenudeo. Tras continuar con la investigación en la Unidad de Delitos contra la Vida se logró establecer la probable participación del imputado en los hechos anteriormente descritos, por lo que el 02 de marzo de 2019 se obtuvo orden de aprehensión, la cual fue ejecutada el 12 de junio de 2019, en el interior del Centro de Reinserción Social, llevándose a cabo la audiencia en la cual se le formuló imputación el 13 de junio de 2019 por el delito de homicidio calificado y se dictó auto de vinculación a proceso en contra de “A” el 17 de junio de 2019.

3.- De la información proporcionada por parte de la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Inspección, que se señala en fecha 04 de julio de 2019 se recibe en dicha dirección el oficio JC 89840/2019, mediante el cual se ordenaba a la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, se realizara la investigación correspondiente, toda vez que el

imputado “A” manifestó que al momento de su detención fue torturado para obtener una declaración. Por tal motivo se inició la carpeta de investigación registrada bajo el número “R” por el delito de tortura en perjuicio de “A”, señalando que dicha carpeta se encuentra en etapa de investigación.

4.- Por último, de la información proporcionada por la autoridad penitenciaria del estado de Chihuahua, se desprende certificado médico practicado al quejoso el 01 de marzo de 2019, en el cual se determina que “A” no presentaba lesiones físicas recientes que pusieran en riesgo su integridad o vida.

5.- Así mismo, a fin de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cuente con los elementos suficientes de convicción, se adjunta al presente informe la siguiente documentación de carácter confidencial, apegándose a los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Chihuahua, y del artículo 73 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos: copia certificada de la carpeta de investigación “Q”; ficha informativa de la carpeta de investigación “L” y copias certificadas del informe policial homologado, el acta de aseguramiento, acta de cadena de custodia, actas de lectura de derechos y certificado de integridad física de ingreso a Fiscalía; oficio FGE-7C/3/2/16/2020 signado por el agente del Ministerio Público encargado del Departamento Jurídico de la Agencia Estatal de Investigación, con información relativa a los hechos descritos en el escrito de queja; oficio FGE-22S-0.3-1-836/2020, consistente en ficha informativa de la carpeta de investigación “R”; y certificado médico de ingreso al CERESO; que constan en 195 folios.

(...)

III. CONCLUSIONES.

A partir del análisis de los hechos motivo de la queja, de los antecedentes del asunto y de las actuaciones realizadas por la autoridad, de conformidad con las premisas normativas aplicables al caso en estudio, tenemos que “A” fue detenido dentro del término legal de flagrancia por el delito contra la salud en la modalidad de posesión simple de narcóticos, toda vez que a raíz de la investigación iniciada en la Unidad de Delitos Contra la Vida por el Homicidio de “J” y “K”, se logró establecer por medio de la plataforma Escudo Chihuahua, que uno de los vehículos involucrados en el ataque a las víctimas era de la marca Nissan, línea Sentra en color gris, con placas de circulación “N”, por lo que elementos de la Agencia Estatal de Investigación se avocaron

a la búsqueda de dicho automotor, siendo localizado a las 16:56 horas del día 27 de febrero de 2019 mientras circulaba sobre la avenida Tecnológico y casi Homero, en dirección de sur a norte, por lo que se procedió a marcarle el alto con comandos sonoros y luminosos, sin embargo el conductor aceleró la marcha del vehículo por lo que se inició una persecución, durante la cual se le indicó mediante comandos sonoros que detuviera su marcha, haciendo caso omiso, posteriormente ingresó al estacionamiento de S-Mart Juventud, lugar en el que se le dio alcance, y en donde fue necesario cerrarle el paso, logrando que se detuviera; al descender los elementos de la unidad logran observar a una persona del sexo masculino, quien dijo llamarse “A”, y a quien tras informársele que el vehículo que conducía podía estar involucrado en la comisión de un hecho delictivo se le solicitó su colaboración con la finalidad de realizarle una inspección en su persona y en el automotor, siendo localizados diversos narcóticos, por lo que se procedió a su detención y lectura de derechos, así como al aseguramiento de las sustancias y objetos encontrados.

Posteriormente el quejoso fue puesto a disposición del Ministerio Público iniciándose la carpeta de investigación registrada bajo el número único de caso “Q” por el delito contra la salud.

Por otro lado, respecto de la investigación iniciada con motivo del homicidio de “J” y “K”, se apertura la carpeta registrada bajo el número único de caso “L”; y tras localizar uno de los automóviles involucrados en los hechos tal como a su conductor y continuar con las diligencias tendientes al esclarecimiento del suceso, se logró acreditar la probable participación de “A”, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión en su contra, siendo ejecutada en el Centro de Reinserción Social, posteriormente se le formuló imputación al quejoso por el delito de homicidio calificado, y se le dictó auto de vinculación a proceso.

En cuanto al señalamiento del quejoso, referente a que fue golpeado durante la detención, es importante mencionar que del informe de integridad física que le fue practicado al momento de ser puesto a disposición de la Fiscalía, se desprende que el detenido únicamente presentaba dolor en el tobillo, sin embargo, tales datos no llevan a concluir que la dolencia fuera consecuencia de malos tratos que el quejoso dice que sufría, pues en el mismo certificado se establece que “A” señala que se torció el pie al pisar mal la banqueta. Por otra parte, en el certificado médico de egreso de Fiscalía se asentó que no presentaba huellas de violencia física recientes. Además en el certificado médico de ingreso al Centro de Reinserción Social número 1, se asienta que

a la exploración física, no se le encontró evidencia de lesiones recientes que pusieran en riesgo la integridad y vida.

No omito manifestarle, que se cuenta con carpeta de investigación registrada bajo el número único de caso “R”, iniciada por el delito de tortura cometido en perjuicio de “A”, encontrándose actualmente en estado de investigación por parte de la Dirección de Inspección Interna. [sic].

II.- EVIDENCIAS

3.- Acta circunstanciada de fecha 14 de marzo de 2019, por parte de la licenciada Ethel Garza Armendáriz, visitadora adscrita al Área de Seguridad Pública y Centros de Reinserción Social de este organismo, en la cual asentó los hechos constitutivos de queja manifestados por “A” en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Estatal número 1, la cual se encuentra debidamente transcrita en el párrafo número 1 de la presente determinación. (Fojas 1 a 2).

4.- Oficio número ZBV-133/2019 de fecha 26 de marzo de 2019, signado por la licenciada Zuly Barajas Vallejo, visitadora de este organismo, mediante el cual solicitó el informe de ley al maestro César Augusto Peniche Espejel, Fiscal General del Estado. (Fojas 5 y 6).

5.- Oficio número FZC/0447/2019 recibido el 02 de abril de 2019, signado por el maestro Carlos Mario Jiménez Holguín, fiscal de distrito, Zona Centro, dirigido al maestro Javier Andrés Flores Romero de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos y con copia para esta Comisión, mediante el cual hizo de su conocimiento los posibles actos constitutivos de tortura manifestados por “A”. (Foja 10).

6.- Evaluación médica para casos de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de “A”, llevada a cabo el 01 de abril de 2019 por la doctora María del Socorro Reveles Castillo, médica adscrita a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la cual determinó que sí existe concordancia entre el dicho del quejoso y las lesiones que presentó. (Fojas 11 a 17).

7.- Evaluación psicológica para casos de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de “A”, realizada el 02 de abril de 2019 por el licenciado Fabián Octavio Chávez Parra, psicólogo adscrito a este organismo, en la cual concluyó que el impetrante se encuentra afectado emocionalmente por el proceso que refiere haber vivido al momento de su detención. (Fojas 18 a 21).

8.- Escrito de fecha 25 de febrero de 2020, signado por el licenciado “**GG**” en su carácter de defensor público de “**A**” dentro de la causa “**S**” (Foja 36), mediante el cual anexó copia simple de los documentos que a continuación se describen:

8.1.- Copia simple del informe de integridad física de “**A**” de fecha 27 de febrero de 2019, realizado por la médico legista “**DD**”, perito médico legista adscrita a la Fiscalía General del Estado. (Foja 37).

8.2.- Copia simple del Protocolo de Estambul realizado a “**A**” el 08 de julio de 2019 por Josué Abdiel Martínez Moncada y Víctor David González Gutiérrez, peritos adscritos al Tribunal Superior de Justicia. (Fojas 38 a 47).

8.3.- Copia simple del certificado médico de ingreso al Centro de Reinserción Estatal número 1 de “**A**”, realizado en fecha 01 de marzo de 2019 por el médico pasante en servicio social “**EE**”, en nombre del doctor “**FF**”, en el que refiere que “**A**” no presenta evidencia de lesiones físicas recientes que pongan en riesgo la integridad o la vida. (Foja 48).

9.- Acuerdo de fecha 28 de febrero de 2020, emitido por el licenciado Ricardo Márquez Torres, juez de control del Distrito Judicial Morelos, mediante el cual se ordenó expedir copia del audio y video de la causa penal “**S**” solicitada por la visitadora ponente. (Fojas 57 y 58).

10.- Oficio número FGE-18S.1/1/349/2020 recibido en fecha 17 de abril de 2020, signado por el maestro Jesús Manuel Fernández Domínguez de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, mediante el cual rindió el informe de ley requerido, mismo que se encuentra transcrito en el punto número 2 del apartado de Antecedentes de la presente resolución (Fojas 63 a 71), al cual anexó los documentos siguientes:

10.1.- Ficha informativa de la carpeta de investigación “**L**”, de fecha 02 de julio de 2019, signada por la licenciada “**T**”, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Delitos Contra la Vida. (Fojas 72 a la 74).

10.1.1.- Copia certificada del informe policial homologado de la carpeta de investigación “**L**”, de fecha 27 de febrero de 2019, signado por los agentes “**G**”, “**H**” y “**I**”. (Fojas 75 a 86).

10.1.2.- Copia certificada del acta de inventario de aseguramiento dentro de la carpeta de investigación “**L**”, de fecha 27 de febrero de 2019, signada por el agente “**G**”. (Fojas 87 a 90).

10.1.3.- Copia certificada del registro de cadena de custodia de la carpeta de investigación “**L**”, de fecha 27 de febrero de 2019, signada por los agentes “**I**” y “**U**”. (Fojas 91 a 99).

10.1.4.- Copia certificada del inventario de vehículo dentro de la carpeta de investigación “**L**”, de fecha 27 de febrero de 2019, signada por “**I**” y “**U**”. (Fojas 100 y 101).

10.1.5.- Copia certificada del acta de inventario de aseguramiento correspondiente a la carpeta de investigación “**L**”, de fecha 27 de febrero de 2019, elaborada por el agente “**I**”. (Fojas 102 y 103).

10.1.6.- Copia certificada del informe de integridad física de ingreso a la Fiscalía General del Estado de “**A**”, elaborado el 27 de febrero de 2019 por la doctora “**DD**”, perito médico legista adscrita a dicha dependencia. (Foja 104).

10.1.7.- Copia certificada de la constancia de autorización de toma de muestra con persona detenida de “**A**”, de fecha 27 de febrero de 2019, firmada por “**A**”, el agente del Ministerio Público “**V**” y el abogado defensor “**W**”. (Foja 105).

10.1.8.- Copia certificada de la constancia de acta de lectura de derechos al detenido “**A**”, de fecha 27 de febrero de 2019, signada por el impetrante y un testigo. (Foja 106).

10.1.9.- Copia certificada del acta de lectura de derechos al detenido “**A**”, de fecha 27 de febrero de 2019, signada por el quejoso, su abogado defensor “**W**” y el agente del Ministerio Público. (Fojas 107 a 109).

10.1.10.- Copia certificada de la constancia de lectura de derechos al imputado de fecha 12 de junio de 2019, dentro de la causa penal “**S**”, misma que se negó a firmar “**A**” y que cuenta con la rúbrica del testigo “**X**”. (Fojas 110 y 111).

10.2.- Copia certificada del oficio número FGE-7C.2/2/2/116/2019 de fecha 12 de junio de 2019, signado por el licenciado “Y”, oficial de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida, Zona Centro, mediante el cual puso al impetrante a disposición de la licenciada Alba Erika Gámez Miramontes, jueza del Tribunal de Control del Distrito Judicial Morelos. (Foja 112).

10.3.- Copia simple del dictamen médico de ingreso al Centro de Reinserción Social Estatal número 1, de fecha 01 de marzo de 2019, signado por el médico pasante en servicio social “EE”, en nombre del doctor “FF”, en el cual se señaló que “A” fue presentado sin evidencia de lesiones físicas recientes que pongan en riesgo la integridad o la vida. (Foja 113).

10.4.- Oficio número FGE-225-0.3-1-836/2020 de fecha 02 de marzo de 2020, signado por “Z”, agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Inspección Interna, mediante el cual remitió al maestro Jesús Manuel Fernández Domínguez, titular de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, tarjeta informativa de la carpeta de investigación “R” (Foja 114), a la que anexó los siguientes documentos:

10.4.1.- Tarjeta informativa de fecha 02 de marzo de 2020, signada por “Z”, agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Inspección Interna, referente a la carpeta de investigación “R”, en relación a posibles actos constitutivos del delito de tortura en contra de “A”. (Fojas 115 a 117).

10.4.2.- Oficio número FGE-7C/3/2/16/2020 de fecha 03 de marzo de 2020, signado por “AA”, agente del Ministerio Público encargado del Departamento Jurídico de la Agencia Estatal de Investigación, dirigido al maestro Jesús Manuel Fernández Domínguez, titular de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, mediante el cual rindió informe respecto a la detención de “A” (Foja 118 y 119), anexando los siguientes documentos:

10.4.2.1.- Copia simple del informe policial homologado de fecha 27 de febrero de 2019, correspondiente a la detención de “A”, realizado por “G”, “H” e “I”, agentes adscritos a la Unidad de Investigación de

Delitos contra la Vida de la Fiscalía General del Estado. (Fojas 120 a 122).

10.4.2.2.- Copia simple de la constancia de lectura de derechos al detenido, firmada por **“A”** el 27 de febrero de 2019. (Foja 123).

10.4.2.3.- Copia simple del informe de integridad física de ingreso de **“A”** a la Fiscalía General del Estado elaborado el 27 de febrero de 2019 por la doctora **“DD”**, perito médico legista adscrita a dicha institución. (Foja 124).

10.4.2.4.- Copia simple del informe de integridad física de egreso de **“A”** de la Fiscalía General del Estado elaborado el 01 marzo de 2019 por la doctora **“DD”**, perito médico legista adscrita a dicha institución. (Foja 125).

10.5.- Oficio número UIDNM-1652/2020 de fecha 18 de marzo de 2020, signado por **“BB”**, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos contra el Narcomenudeo, dirigido a la maestra Bertha Alicia González García y el maestro Jesús Manuel Fernández Domínguez, ambos de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada (Foja 126), por medio del cual se anexó lo siguiente:

10.5.1.- Copia certificada de la carpeta de investigación **“Q”** instruida en contra de **“A”** por el delito de posesión simple de narcóticos, misma que dio origen a la causa penal **“S”**. (Fojas 127 a 263).

11.- Acuerdo de fecha 08 de julio de 2020, por medio del cual el licenciado Ricardo Márquez Torres, juez de control del Distrito Judicial Morelos, autorizó a personal de esta Comisión para que recibiera copia simple del registro de audiencia inicial, misma que se entregó en 2 discos que contienen 2 audiencias dentro de la causa penal **“S”** por el delito de homicidio en donde aparece como imputado **“A”** entre otros. (Foja 265).

12.- Escrito de fecha 17 de agosto de 2020, signado por el licenciado **“GG”**, defensor penal público de **“A”**, mediante el cual solicitó se emita la resolución correspondiente al presente expediente de queja. (Foja 269).

13.- Oficio número 12221/2020 recibido en fecha 07 de octubre de 2020, firmado por la licenciada Hilda María Márquez Torres, jueza de control del Distrito Judicial Morelos, mediante el cual indicó que se señalaron las 09:00 horas del día 23 de noviembre de 2020 para que se lleve a cabo la audiencia intermedia de “**A**”. (Foja 270).

14.- Oficio número 63217/2020 recibido en fecha 27 de octubre de 2020, signado por el licenciado Ricardo Márquez Torres, juez penal adscrito al Tribunal de Control del Distrito Judicial Morelos, mediante el que informó a este organismo a petición de la defensa del impetrante, que se señalaron las 09:00 horas del día 23 de noviembre de 2020 para que se lleve a cabo la audiencia intermedia de “**A**”. (Fojas 271 y 272).

15.- Acta circunstanciada de fecha 10 de noviembre de 2020, mediante la cual la licenciada Zuly Barajas Vallejo, visitadora de esta Comisión, transcribió en lo medular la videograbación de las audiencias judiciales de fecha 13 de junio de 2019 y 07 de febrero de 2020, en las que aparece como imputado “**A**” en la causa penal “**S**”, contenidas en los discos descritos en el párrafo 11 de la presente resolución. (Fojas 285 a 295).

16.- Oficio recibido en fecha 24 de noviembre de 2020, firmado por “**HH**” y “**GG**”, abogados defensores de “**A**”, ambos pertenecientes al Instituto de Defensoría Pública, mediante el cual informaron que la audiencia de preparación para juicio oral del quejoso, será llevada a cabo el 15 de diciembre de 2020. (Foja 299).

17.- Oficio número 34712/2020 recibido en fecha 25 de noviembre de 2020, signado por la licenciada Hilda María Márquez Torres, jueza de control del Distrito Judicial Morelos, mediante el cual indicó que se señalaron las 09:00 horas del día 15 de diciembre de 2020 para que se lleve a cabo la audiencia intermedia de “**A**”. (Foja 300).

18.- Acta circunstanciada de fecha 2 de diciembre de 2020, mediante la cual el licenciado Jorge Jiménez Arroyo, visitador adscrito al área de orientación y quejas de esta Comisión, dio fe de la entrevista que sostuvo con “**O**”. (Fojas 311 a 319).

19.- Acta circunstanciada de fecha 4 de diciembre de 2020, mediante la cual el licenciado Jorge Jiménez Arroyo, visitador adscrito al área de orientación y quejas de este organismo, dio fe de la entrevista realizada a “**O**”. (Fojas 320 y 321).

III.- CONSIDERACIONES

20.- Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos es competente para conocer y resolver en el presente asunto, atento a lo dispuesto por el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, párrafo tercero, inciso A, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con los numerales 3 y 6, fracciones I y II, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como 6, 12 y 84, fracción III, del Reglamento Interno de este organismo.

21.- Según lo establecido en los artículos 39 y 40, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, resulta procedente, por así permitirlo el estado que guarda la tramitación del presente asunto, analizar los hechos, los argumentos y las pruebas, así como los elementos de convicción recabados y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o las personas servidoras públicas han violado o no derechos humanos, al haber incurrido en actos ilegales o injustos, por lo que las pruebas recabadas durante la investigación, deberán ser valoradas en su conjunto de acuerdo a los principios de la lógica y la experiencia, con estricto apego al principio de legalidad que demanda nuestra carta magna para que, una vez realizado ello, se pueda producir convicción sobre los hechos materia de la presente queja.

22.- Antes de entrar al estudio de las probables violaciones a derechos humanos, este organismo precisa que no se opone a la prevención, investigación y persecución de delitos por parte de las autoridades, sino a que con motivo de estas actividades se vulneren derechos humanos, por lo que hace patente la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas e investigar con los medios a su alcance, los ilícitos que se cometan en el ámbito de su competencia, a fin de identificar a las personas responsables y lograr que se les impongan las sanciones legales correspondientes.

23.- Por ello, la presente resolución, no constituye un pronunciamiento respecto a la participación y/o responsabilidad de “**A**” en los hechos delictivos que le fueron imputados por las autoridades competentes, sino que únicamente se ocupará en determinar si, con motivo de los hechos reclamados ante esta Comisión, se acredita alguna violación a los derechos humanos del impetrante.

24.- Corresponde ahora analizar si los hechos derivados de la queja presentada por “**A**”, quedaron acreditados, para en su caso, determinar si los mismos resultan ser violatorios a derechos humanos.

25.- En ese contexto “**A**” manifestó en lo medular, que el 27 de febrero de 2019, aproximadamente a las dos de la tarde, fue detenido en ciudad Chihuahua por

elementos de la Fiscalía General del Estado en un centro comercial localizado en la avenida Tecnológico, mientras se encontraba acompañado de su esposa, hijas e hijo; indica el quejoso que luego de ser golpeado en el lugar de detención, fue trasladado con el rostro cubierto a una vivienda, donde lo tuvieron detenido aproximadamente por media hora, en dicho lugar lo golpearon en las costillas, desconociendo el impetrante con que objeto fue lesionado pues se encontraba con los ojos tapados, posteriormente lo llevaron a otro domicilio mientras los agentes realizaban un operativo, para finalmente llevarlo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Zona Centro, donde fue amenazado con privarlo de la vida, así como a su familia. Indicó “**A**” al momento de la entrevista con personal de esta Comisión, que su esposa “**O**” se encontraba en un hotel en la avenida Tecnológico en compañía de sus hijas “**C**”, “**D**” y “**E**”, custodiadas por tres agentes ministeriales, mientras que su menor hijo “**F**” fue entregado a sus suegros por personal de la Fiscalía General del Estado. (Visible en fojas 1 y 2).

26.- En fecha 1 de abril de 2019, “**A**” relató ante la doctora María del Socorro Reveles Castillo, médica adscrita a este organismo, al momento de realizar su evaluación física, que: “el 26 de febrero de 2019, se encontraba en una tienda S-Mart aproximadamente a las 14:00 hrs., al salir de la tienda con su familia se subió a su vehículo y fue rodeado por policías ministeriales, quienes le apuntaron con rifles y le dijeron que se bajara del vehículo. Comenzaron a golpearlo con los puños en el costado izquierdo, lo esposaron y lo subieron en el asiento trasero de una camioneta. Ahí le dijeron que “ya lo había cargado la verga”, y al cuestionarlos sobre la causa de la detención, le respondieron que venía fumando un chorro de mota, a lo que él respondió que no fuma mota. Posteriormente revisaron sus datos personales y detectaron que firmaba en Ciudad Juárez y el oficial comentó a otro que ya habían encontrado un culpable, que ahorita lo metían y que le daban su dosis. Lo trasladaron a una casa no ubicada, lo bajaron de la camioneta y le taparon la cara con su playera. En ese momento sintió un golpe en la cara que le produjo sangrado por la nariz, lo sentaron en una silla y comenzaron a golpearlo con una tabla en la planta de los pies, diciendo que se tenía que declarar culpable de un homicidio; también lo acostaron en el piso boca arriba, cubierta la cara con su playera, y le echaron agua en la cara, mientras le dieron un golpe hasta que le sacaron el aire, causándole sensación de ahogamiento y le dieron toques eléctricos en los brazos con la chicharra, así como un golpe con el cañón del rifle en pierna izquierda. Lo levantaron y continuaron golpeándolo en el cuerpo. Posteriormente fueron a “reventar” otra casa y detuvieron a otras personas que no conocía. Fueron trasladados a la Fiscalía Zona Centro, lo metieron en una oficina y le dijeron: “lo que tiene que decir”, si no firmaba lo que querían los policías, le iban a hacer daño a su esposa. También comentaron: “tus derechos humanos me valen verga”. Metieron a su esposa a la oficina, la hincaron y posteriormente los llevaron a todos (él, su

esposa y sus hijos) a un terreno baldío y le dijeron que como no quería agarrar muleta, se despidiera de su familia, al cabo que nadie sabía que lo habían detenido, nadie iba a saber que lo habían matado. Tomaron a su hija y le dijeron que o doblaba las manos o mataban a todos, por lo que decidió aceptar lo que le pedían para que no maltrataran a su familia. A su familia la tenían los policías en un hotel para obligarla a declarar contra él. Posteriormente regresó a la Fiscalía y el 1 de marzo fue trasladado al Centro de Reinserción Social Estatal número 1 donde se encuentra actualmente”. (Visible en fojas 11 y 12).

27.- Por su parte, la Fiscalía General del Estado, en su informe de fecha 17 de abril de 2020³ indicó respecto a los hechos manifestados por “**A**” que: *“...Por medio del presente, los suscritos oficiales “G”, “H” e “I”, agentes adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, nos permitimos informar a usted que el día de hoy 27 de febrero de 2019, al andar realizando diligencias de investigación de los hechos en donde perdieran la vida “J” y “K”, esto dentro del número de expediente “L”, siendo las 13:00 horas nos constituimos en la Dirección de Seguridad Pública Municipal ubicada en la Avenida Homero número 500, lugar en el cual solicitamos nos permitieran el acceso a las cámaras de Escudo Chihuahua con el fin de localizar el vehículo Nissan Tsuru de color negro con placas de circulación “M”, el cual había participado en los hechos que nos ocupan y que había sido localizado y asegurado el día de ayer alrededor de las 23:00 horas en las calles Teófilo Borunda y Artículo 123 de la colonia Centro de esta ciudad, en el cual se localizaron casquillos calibre .223 y 9mm, y con ello saber quiénes habían abandonado dicho vehículo e identificar a las personas agresoras, por lo que nos permitieron el acceso y con ayuda del encargado de Escudo Chihuahua, el policía segundo “II”, en la cámara ubicada en la avenida Ocampo se logró localizar al vehículo antes descrito el día 26 de febrero a las 13:10 horas y al observar dichas cámaras se puede deducir que del vehículo en mención descienden tres personas del sexo masculino, en el lugar duran algunos minutos, y luego se observa que arriba un vehículo Sentra de color gris y al parecer los tres sujetos abordan dicho vehículo, por lo que se hace el seguimiento por las videocámaras de este último automotor en las cámaras (lectoras de placas) que se ubican entre las calles Tecnológico y en la avenida Vallarta siendo las 13:32 horas se logra ubicar el vehículo, el cual se detecta tiene placas de circulación “N” por lo que el segundo “II”, ingresa el número de placa al sistema de Escudo Chihuahua, arrojando que ese vehículo, el día de ayer 26 de febrero poco antes de los hechos en donde perdieron la vida ambas víctimas, pasa por el lector de placas que se ubica en la*

³ Es importante hacer notar la dilación en la que incurrió la Fiscalía General del Estado para remitir el informe de ley, solicitándose dicha información por parte de este organismo en fecha 26 de marzo de 2019 y enviándose recordatorios para el cumplimiento de dicho informe los días 27 de mayo de 2019, 13 de junio de 2019 y 26 de febrero de 2020. La Fiscalía envió la información el 17 de abril de 2020, es decir, 388 días después de que se solicitó, cuando el artículo 33 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos fija un plazo máximo de 15 días naturales.

calle Silvestre Terrazas, manifestándonos el segundo “II” que se encontraban analizando los videos y en cuanto tuvieran el reporte oficial nos los harían llegar, por lo que al tener indicios de la participación de este vehículo en los hechos, ya que como se indicó, es en el que se observa que abordan los diversos sujetos que descienden del vehículo Tsuru negro, posteriormente de realizado el hecho, además por haberse detectado que circula cerca del lugar y a la hora que se realizara el homicidio, es por lo anterior que se da aviso a los diversos compañeros de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida y se inicia la búsqueda de dicho automotor consistente en un vehículo Sentra de color gris con placas de circulación “N”, para su aseguramiento, ya que en él pueden andar a bordo las personas que participaron en el evento delictivo, por lo que al andar en búsqueda del vehículo antes mencionado, en esta fecha, los suscritos quienes realizábamos la búsqueda por el norte de la ciudad logramos ubicar el automotor, Sentra color gris con placas de circulación “N”, siendo las 16:56 horas, el cual circulaba sobre la avenida Tecnológico y casi Homero, en dirección de sur a norte, por lo que le marcamos el alto con comandos sonoros y luminosos, sin embargo al observarnos el conductor, acelera su marcha, de nueva cuenta mediante comandos sonoros y verbales se le indica que pare su marcha, haciendo caso omiso, avanza por debajo del puente de la intersección de la avenida Tecnológico y Homero, dando vuelta en “U”, por lo que seguimos, el vehículo ingresa al estacionamiento de S-Mart Juventud, dándole alcance, y al no detener su marcha pese a las indicaciones de detenerse, como se dijo con comandos sonoros, luminosos y alta voz, fue necesario cerrarle el paso, logrando que se detuviera, descendiendo los suscritos de la unidad y acercándonos al vehículo, en el cual se logra observar del lado del piloto a una persona del sexo masculino y del lado del copiloto a una persona del sexo femenino, además se observan cuatro menores de edad en el asiento trasero del vehículo, identificándonos en ese momento como agentes de la policía investigadora e indicándole que se realizaba una investigación en la cual al parecer había participado el vehículo el cual él conducía, por lo que se les solicita que desciendan del vehículo, negándose a bajar, indicándole nuevamente la razón del porqué les solicitamos detuviera su marcha, y pidiéndole nuevamente con comandos verbales descienda del vehículo y se identificaran, finalmente acceden ambos, bajan del automotor, identificándose la persona masculina como “A” así como la fémina dijo llamarse “O” indicando que los menores son sus hijos, por lo que les informamos de nueva cuenta que se tenía información que dicho vehículo probablemente participó en la comisión de un hecho delictivo y ante la actitud evasiva que tuvo al omitir detenerse ante las señales de unos servidores, acelerar y no querer descender del vehículo en un primer momento, es que se le indica que por seguridad se les realizaría una revisión superficial, localizándole a la persona masculina en la bolsa derecha de su pantalón cuatro envoltorios en bolsa transparente que contiene sustancia en polvo blanco, con características propias de

la cocaína, en la diversa bolsa, un teléfono celular marca Huawei, color negro, respecto a la fémina se solicitó la presencia de la compañera agente “P”, quien le realiza un revisión superficial no localizándole objeto de peligro o ilícito, por todo lo anterior además se les informa se les realizaría una inspección al vehículo ya que podría haber armas de fuego u objetos relacionados con el homicidio así como debajo del asiento del conductor, una bolsa transparente con sellos Ziploc que contiene hierba seca, verde y olorosa con características de la marihuana por lo que al cuestionarle del polvo blanco y la hierba seca, verde olorosa con características de la marihuana al conductor, éste refirió de manera nerviosa que era de él, ya que él es el consumidor y que había comprado ambas drogas para él, por lo anterior es que en este momento al estar estas sustancias en el radio de disponibilidad del masculino, es que se procede a su detención, informándole a “A”, que quedaba detenido por el delito contra la salud, en su variante de posesión simple de narcótico, leyéndole sus derechos a las 17:01 horas, realizando el aseguramiento de las sustancias, teléfono celular Huawei negro, así como el vehículo automotor, Nissan Sentra color gris con placas de circulación “N”, en el cual cabe señalar que se localizaron 11 tarjetas que se aprecian nuevas con chip de la compañía Telcel, localizando en la parte central del tablero, un teléfono celular color dorado marca “Hisence” y diversos tickets de compras los cuales también son asegurados, posteriormente nos trasladamos a las oficinas de la Fiscalía Zona Centro para la revisión médica de la persona detenida y ponerla a disposición del Ministerio Público, así mismo, se hace del conocimiento que se trasladó a la fémina y a los cuatro menores de edad a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado a efecto de garantizar su seguridad y realizar diligencias relacionadas a las investigaciones. Así como la elaboración del presente narrativo, no omito informarle que nos fue proporcionado por el segundo “II” de la Dirección de Seguridad Pública Municipal el análisis de las cámaras del día del hecho, el cual se anexa, sin más que informar...”. (Visible en fojas 64 a 66).

28.- De igual manera, en dicho informe manifestó la autoridad respecto a la esposa del impetrante que ésta: “...se encontraba en un hotel custodiada por tres agentes ministeriales, la autoridad informa que se tenía conocimiento de que por parte del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Contra la Vida, “O” contaba a solicitud de ella misma, con custodia por parte de oficiales de la Agencia Estatal de Investigación con carácter de testigo protegido dentro de la carpeta de investigación, por lo que se le brindaron las medidas de protección y resguardo temporal en un hotel de la ciudad, señalando que en ningún momento fue en contra de su voluntad, sino que permaneció en dicho sitio hasta que decidió retirarse, renunciando a las medidas de protección que se le brindaban por parte de la Fiscalía General del Estado...” (visible en foja 66), lo anterior, sin indicar sobre el paradero de “C”, “D”,

“E” y “F”; sin tener en ese momento esta Comisión datos para la localización de la concubina e hijos del quejoso, debido a que él mismo desconocía dicha información.

29.- La dilucidación del presente caso, versará sobre dos hechos probablemente violatorios de los derechos humanos del impetrante, el primero es supuesta detención arbitraria y dilación para la presentación ante el Ministerio Público de “A” por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado y el segundo hecho, los actos de tortura que manifestó haber sufrido por dichos agentes.

30.- Respecto a su detención, aunado a lo que manifestó el quejoso en su queja de fecha 14 de marzo de 2019 y en su evaluación médica del 01 de abril de 2019, se cuenta con la narración de los hechos realizada ante los peritos Josué Abdel Martínez Moncada y Víctor David González Gutiérrez, dentro del Protocolo de Estambul que se le practicó a “A”: *“... Yo me encontraba en el estacionamiento del S-Mart Campo Bello en compañía de mi esposa e hijos, al salir una unidad de policías ministeriales, me cerraron el paso, me gritaban apuntándome que me bajara del carro, me bajé y me preguntaron que de donde era, yo les contesté que de Juárez, me arrestaron y me subieron a una camioneta en la cabina...”*. (Visible en foja 40).

31.- Por su parte, respecto a la detención de “A”, “O” manifestó ante personal de este organismo lo siguiente: *“...el día 07 de febrero del año 2018, siendo aproximadamente las 14:00 horas, es que mi esposo iba saliendo del S-Mart que se ubica en el periférico de la Juventud en la ciudad de Chihuahua, yo me encontraba en el vehículo, estábamos en el estacionamiento de la tienda, a bordo del vehículo que conducía mi esposo, estaban también mis hijos que son cuatro, todos ellos menores de edad (ocho, siete, seis y mi bebé de diez meses), sale mi esposo y se sube al carro y al arrancar el vehículo y avanzar unos cuantos metros, estando todavía al interior del estacionamiento es que llegaron muchas unidades de policía, ningún vehículo traía logotipos, de hecho en ese instante no sabíamos que eran elementos de policía, por lo que llegan apuntándonos con armas y ordenándole a mi esposo que se baje del carro, mi esposo se sacó de onda, abrió la puerta del carro y unas personas lo bajaron de manera violenta del carro y lo aventaron contra un vehículo de color rojo, luego comenzaron a golpearlo, por lo que le dieron con el puño en el cuerpo, lo golpearon en la parte del estómago, posteriormente me bajaron también a mí del vehículo, por lo que me apartaron para el lado de la cajuela del carro, nos quitaron los teléfonos celulares, me interrogaron sobre que es lo que estamos haciendo y les dije que andamos en el mandado y me preguntaron ¿por qué? ¿cuantas personas hay en mi casa?, yo le contesté que solo estamos mi esposo, mis hijos y yo, por lo que me empezaron a hablar golpeado y me decían que no me hiciera pendeja, luego me subieron a una camioneta color arena, en esos*

momentos mi esposo estaba abajo y los elementos lo seguían golpeando, luego subieron a mi esposo a una troca de color rojo y se lo llevaron en otra dirección, quiero aclarar que era la única de color rojo, los demás vehículos eran de color blanco y de color arena, el vehículo en el que nosotros íbamos, se lo llevó otra persona y en dicho vehículo iban mis hijos (dos) la de siete y el niño de ocho años...". (Visible en fojas 315 y 316).

32.- La autoridad indica en su tarjeta informativa de fecha 2 de julio de 2019, que **"A"** fue detenido en flagrancia, sin embargo dicha detención no es por los hechos que se le imputan relativos a su supuesta participación en el homicidio de **"J"** y **"K"**, sino por el delito de narcomenudeo: *"...derivado de la investigación se logró la localización del vehículo Nissan Sentra descrito anteriormente, a bordo del cual viajaba el imputado **"A"**, con su esposa e hijos, y al realizar una revisión en el mismo se le localizaron diversos narcóticos por lo que fue detenido en flagrancia por el delito de narcomenudeo y puesto a disposición de aquella unidad de investigación por oficiales de la Agencia Estatal de Investigación. De ahí se continuó con la investigación dentro de esta unidad de investigación y de las diligencias practicadas se logró establecer la probable participación de imputado en los hechos que nos ocupan, por lo que se obtuvo orden de aprehensión en fecha 2 de marzo del presente año, misma que le fue ejecutada en el interior del Centro de Reinserción Social una vez que fue reforzada la carpeta de investigación, esto en fecha 12 de junio de 2019, formulando imputación el día 13 de junio de 2019 y posteriormente obteniendo su vinculación a proceso en fecha 17 de junio de 2019...". (Visible en foja 73).*

33.- Es así, que la autoridad manifestó que los agentes **"G"**, **"H"** e **"I"**, adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado, el día 27 de febrero de 2019, es decir, un día después del homicidio de **"J"** y **"K"** en ciudad Chihuahua, acudieron a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública ubicada en la avenida Homero, para solicitar acceso a las cámaras de la plataforma Escudo Chihuahua, con el fin de ubicar la ruta seguida por el vehículo Nissan Tsuru, color negro con placas **"M"**, que tripulaban los tres sujetos que privaron de la vida a **"J"** y **"K"**. Del análisis de las videograbaciones a las que los agentes tuvieron acceso, se determinó que luego del homicidio, los sujetos que tripulaban el mencionado vehículo, con placas número **"M"**, se bajaron del mismo en la avenida Teófilo Borunda y calle Artículo 123, colonia Centro, para abordar un automóvil Sentra, color gris, con placas **"N"**. Cabe mencionar que en el análisis hecho por la Dirección de Seguridad Pública (visible en fojas 144 a 160), se indica que las placas de dicho vehículo fueron detectadas hasta que una cámara situada en el cruce de las avenidas Tecnológico y Vallarta, lo ubicó en dirección a la avenida Juan Escutia (visible en foja 157), es decir, los tres sujetos *al parecer*

abordaron el automóvil Sentra o en palabras de la autoridad: “...*al parecer los tres sujetos abordan dicho vehículo...*” (visible en foja 64), y ninguna de las cámaras que siguieron el recorrido logró captar el número de placas, hasta que en el cruce de las avenidas mencionadas, se tomó una captura de las mismas, varios kilómetros más adelante y existiendo tramos en los que no hay cámaras de la plataforma Escudo Chihuahua.

34.- Aunado a lo anterior, los agentes de la Fiscalía General del Estado capturaron a “**A**” el día 27 de febrero de 2019, tripulando el vehículo con placas “**N**” en compañía de su familia a escasos metros de donde se encuentra la Dirección de Seguridad Pública, lugar donde recién se les había compartido la información sobre el recorrido de los vehículos, prácticamente cruzando la avenida Tecnológico, sin embargo los agentes no lo detuvieron por los graves hechos que le imputan, es decir, participar en el homicidio de “**J**” y “**K**”, sino que lo detuvieron al verlo transitar de manera evasiva y reconocer las placas con número “**N**”, localizando dentro de su automóvil droga, por lo que fue remitido al agente del Ministerio Público por el delito de narcomenudeo.

35.- Otra cuestión mencionada por el impetrante es la relativa a la hora en que fue detenido, pues éste —al igual que “**O**” —, manifestó que fue aproximadamente a las catorce horas, por su cuenta, los agentes informaron que dicha detención se dio a las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos, es decir, según el dicho de “**A**” y “**O**” existe una discrepancia de casi tres horas, en las que la autoridad no informó que sucedió, sin embargo, los agentes informaron que pusieron a disposición del agente del Ministerio Público al impetrante a las dieciocho horas con quince minutos, no contando este organismo con evidencia de que la detención, —como lo mencionan “**A**” y “**O**”—, se dio desde las catorce horas.

36.- De lo anterior, para esta Comisión subsiste una duda razonable respecto a lo manifestado por “**A**”, al no concordar las diversas declaraciones que rindió, en primer lugar tenemos que en su escrito inicial de queja éste indicó que: “...*Fui detenido el día 27 de febrero, en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, aproximadamente a las 14:00 horas, por agentes de la policía ministerial, por el S-Mart de la calle Tecnológico, andaba en compañía de mi esposa y de mis hijos, cuando llegué a un cajero dentro de S-Mart y de ahí fui detenido por varios agentes que se me cerraron y me empezaron a golpear, de ahí me llevaron a una casa sin saber a dónde...*”, posteriormente, en su narración de los hechos ante la doctora María del Socorro Reveles Castillo, para efecto de la evaluación médica practicada por este organismo, “**A**” manifestó que: “...*el día 26 de febrero de 2019 se encontraba en una tienda S-Mart aproximadamente a las 14 horas salió de la tienda con su familia, se subió a su vehículo y fue rodeado por policías ministeriales*”

quienes le apuntaron con rifles y le dicen que se baje del vehículo. Comenzaron a golpearlo con los puños en el costado izquierdo, lo esposaron y lo subieron en el asiento trasero de una camioneta...”, en lo que respecta su declaración ante los peritos que llevaron a cabo el Protocolo de Estambul, “A” indicó que: “...Yo me encontraba en el estacionamiento del S-Mart Campo Bello en compañía de mi esposa e hijos, al salir una unidad de policías ministeriales me cerraron el paso, me gritaban apuntándome que me bajara del carro, me bajé y me preguntaron que de donde era, yo les contesté que de Juárez, me arrestaron y me subieron a una camioneta en la cabina, ahí me pegaban con las rodillas y los puños en las costillas...”.

37.- Por parte de “O”, quien se encontraba acompañando al impetrante junto con sus 4 hijos, tenemos que ésta indicó lo siguiente: *“...el día 07 de febrero del año 2018, siendo aproximadamente las 14:00 horas, es que mi esposo iba saliendo del S-Mart que se ubica en el periférico de la Juventud en la ciudad de Chihuahua, yo me encontraba en el vehículo, estábamos en el estacionamiento de la tienda, a bordo del vehículo que conducía mi esposo, estaban también mis hijos que son cuatro, todos ellos menores de edad (ocho, siete, seis y mi bebé de diez meses), sale mi esposo y se sube al carro y al arrancar el vehículo y avanzar unos cuantos metros, estando todavía al interior del estacionamiento es que llegaron muchas unidades de policía, ningún vehículo traía logotipos, de hecho en ese instante no sabíamos que eran elementos de policía, por lo que llegan apuntándonos con armas y ordenándole a mi esposo que se baje del carro, mi esposo se sacó de onda, abrió la puerta del carro y unas personas lo bajaron de manera violenta del carro y lo aventaron contra un vehículo de color rojo, luego comenzaron a golpearlo, por lo que le dieron con el puño en el cuerpo, lo golpearon en la parte del estómago, posteriormente me bajaron también a mí del vehículo, por lo que me apartaron para el lado de la cajuela del carro, nos quitaron los teléfonos celulares, me interrogaron sobre que es lo que estamos haciendo y les dije que andamos en el mandado y me preguntaron ¿por qué?...”, de lo manifestado por “A” y por “O”, tenemos que no existen elementos objetivos que nos permitan dilucidar la hora en que fueron detenidos ni las circunstancias en que se llevó a cabo dicha detención, aunado a que el quejoso manifestó que acudió al mencionado centro comercial para entrar a un cajero automático y “O” le dijo a la autoridad que “andaban en el mandado”, de lo que sí se tiene certeza, es que éstos se encontraban acompañados de sus hijos y fueron detenidos en el estacionamiento del centro comercial.*

38.- En lo relativo a la violación al derecho a la integridad y seguridad personal que “A” manifestó haber sufrido por parte de los agentes que lo detuvieron, la autoridad presentó como evidencia el informe de integridad física de ingreso de fecha 27 de febrero de 2019, realizado al quejoso por la médico legista de la Fiscalía General

del Estado, en el cual se concluye que el detenido presentaba sigilaciones (chupetones de 2 días de evolución) en región lateral derecha en la parte inferior del cuello, señalando que el quejoso manifestó tener dolor en el tobillo pues se torció el pie al pisar mal la banqueta cuando llegó a dicha dependencia (visible en foja 124); así mismo, la autoridad presentó el informe de integridad física de egreso de la Fiscalía General del Estado de fecha 1 de marzo de 2019, en el cual se determina que “**A**” no presentaba huellas de violencia física recientes al momento de su exploración. (Visible en foja 125).

39.- En esta misma tesitura, la autoridad remitió el certificado médico de ingreso al Centro de Reinserción Social Estatal número 1, firmado por el médico pasante en servicio social “**EE**”, de fecha 1 de marzo de 2019, en el que refiere no observar evidencias de lesiones físicas recientes que pongan en riesgo la integridad o la vida de “**A**”. (Visible en foja 113).

40.- Por parte de esta Comisión, se recabó como evidencia la evaluación médica para casos de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, elaborada por la doctora María del Socorro Reveles Castillo, médica adscrita a este organismo, quien en su apartado de conclusiones y recomendaciones indicó lo siguiente: “...1.- Las lesiones puntiformes en brazo izquierdo tienen concordancia con quemadura producida por chicharra. 2.- Las lesiones en muñecas concuerdan con excoriaciones producidas por el uso de esposas muy apretadas. 3.- La lesión circular en muslo izquierdo es de origen traumático. 4.- Las equimosis que refiere, por el tiempo de evolución pudieron haberse resuelto de manera espontánea...”. (Visible en foja 15).

41.- En lo referente a las lesiones puntiformes en brazo izquierdo que concuerdan con quemadura producida por descargas eléctricas (*chicharra*), “**A**” le mencionó a la doctora María del Socorro Reveles Castillo que: “...*le dieron toques eléctricos en los brazos con la chicharra...*” (visible en foja 12), por lo que existe coincidencia entre el dicho del impetrante y los hallazgos del personal de esta Comisión.

42.- De igual forma, el licenciado Fabián Octavio Chávez Parra, psicólogo adscrito a este organismo, en su evaluación psicológica para casos de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, estableció que “**A**” se encuentra afectado emocionalmente por el proceso que refiere que vivió (visible en foja 21), indicando que al correlacionar el grado de concordancia entre los hallazgos psicológicos y la descripción de la presunta tortura y/o maltrato, éstas se muestran y concuerdan. (Visible en foja 20).

43.- Robustece las conclusiones del personal médico y psicológico de esta Comisión, el Protocolo de Estambul realizado por los peritos Josué Abdel Martínez

Moncada y Víctor David González Gutiérrez, ambos adscritos al Tribunal Superior de Justicia, en el que se asentó la siguiente declaración de “A”: “...Yo me encontraba en el estacionamiento del S-Mart Campo Bello en compañía de mi esposa e hijos, al salir una unidad de policías ministeriales, me cerraron el paso, me gritaban apuntándome que me bajara del carro, me bajé y me preguntaron que de donde era, yo les contesté que de Juárez, me arrestaron y me subieron a una camioneta en la cabina, ahí me pegaban con las rodillas y los puños en las costillas, me gritaban que porqué había hecho eso, yo les contestaba que no sabía de qué me hablaban, me decían que no me hiciera pendejo, me amenazaron diciendo que se llevaron a mi esposa e hijos, me llevaron a una casa, me sentaron en una silla, me quitaron la ropa y me empezaron a pegar en las costillas y en las plantas del pie con una toalla, me tiraron al suelo y me patearon en el abdomen, yo no les aceptaba la culpa, después me sacaron al patio y me pusieron a mis hijos y a mi esposa frente a mí, los hincaron y apuntaron con un arma en la cabeza, mi hija gritaba, yo les dije que yo había hecho todo lo que ellos decían con tal que los dejaran en paz. Un tiempo después me llevaron a la Fiscalía y ahí en una oficina me hicieron declarar lo que ellos me decían, me bachoneaban cuando me equivocaba y me gritaba que tenía que hacerlo de nuevo, en una ocasión me trajeron de nuevo a mi esposa y con jalones de cabello la hincaron de nuevo frente a mí, dijeron que ella ya había confesado que yo era el líder, me llevaron a una celda y ahí me pusieron una bolsa de plástico en la cara y me pegaban en las costillas, después ya no me hicieron nada. Antes en la casa también me tiraron al suelo y me daban chicharrazos en la espalda, abdomen y testículos, me pusieron en un charco de agua y pegaban unos cables que me daban toques, cuando llegué a la Fiscalía estaba todo ensangrentado, una doctora me revisó y me preguntó que si me habían golpeado, pero ahí estaba un agente y antes me había advertido que no dijera nada si no me iba a ir peor, por lo que no le contesté nada a la doctora...”. (Visible en foja 40).

44.- Dentro de las evidencias físicas encontradas por los peritos al realizar el Protocolo de Estambul a “A”, se encuentran: “...Concordancia entre la historia de síntomas físicos y discapacidades agudos y crónicos con las quejas de malos tratos: Existe un grado moderado de concordancia entre la presentación del dolor, aparición de moretones (hematomas) y la discapacidad temporal a los movimientos, además de los síntomas crónicos referidos con respecto a los mecanismos de lesión aquejados durante la tortura; Concordancia entre los hallazgos de la exploración física con las quejas de malos tratos: Durante la exploración física fue posible evidenciar lesiones que concuerdan en un grado alto con los métodos de tortura y mecánicos de producción, las cuales se describe anteriormente en el apartado de exploración física, excluyendo las lesiones derivadas de antecedentes de accidente y quirúrgicos. No fue posible correlacionar el resto de las lesiones aquejadas debido a que siguiendo un proceso evolutivo normal han restituido a mejoría clínica

completa y comúnmente no dejan secuelas como lo son los hematomas. La ausencia de signos físicos no excluye la posibilidad de que se hayan infligido torturas o malos tratos; Correlación entre la historia de síntomas físicos y las pruebas de evidencia escrita y en video: No fue posible señalar un grado de correlación debido a que no se contó con la información necesaria para validar o descartar de forma escrita y/o visual las lesiones quejadas por el evaluado, afirmando él, que le fueron practicados diversos exámenes médicos a su ingreso y egreso de las distintas instituciones a donde fue trasladado (Fiscalía), de los cuales no se tuvo acceso ya que no fueron remitidos a esta unidad, habiendo sido solicitadas mediante oficio con anterioridad. Se tuvo a la vista únicamente el certificado de ingreso al CERESO No. 1, en el que no se hace mención de lesiones, no obstante por tiempo de evolución hasta el día de la evaluación, debieron haber sido notorias el día de su detención y documentadas en el mismo. Cabe mencionar que el médico quien suscribe, doctor “FF” con cédula profesional número “CC”, cuenta con registro de licenciatura como médico cirujano dentista y no como médico cirujano, por lo que no es congruente que un profesionista en el área dental, realice inspecciones médicas...”. (Visible en foja 45).

45.- En el mismo protocolo, se establecen como evidencias psicológicas las siguientes: “...El examinado presenta síntomas de ansiedad, inquietud, miedo, preocupación, aislamiento, dificultades para conciliar el sueño, recuerdos recurrentes de lo sucedido y falta de energía para realizar actividades cotidianas; Basándonos en los resultados obtenidos, se encuentran las características para diagnosticar un trastorno; No se encuentran elementos que permitan deducir la existencia de daño cerebral orgánico...”. (Visible en foja 46).

46.- Por lo tanto, el citado protocolo expone como conclusiones médicas que: “...De acuerdo con el análisis de la información de “A”, es posible señalar que existen datos concordantes al dicho y exploración física denominados como actos de posible tortura; un grado moderado a alto de concordancia entre las lesiones descritas al dicho con varios métodos de tortura que aqueja el evaluado. Presentó hasta el día de la entrevista lesiones en fase de resolución y crónicas, concordante con el tiempo de evolución normal, no obstante, no es posible ubicar en tiempo y espacio dichas lesiones mediante pruebas en los certificados médicos, ya que en ellas no se hace mención de las mismas y por tiempo de evolución hasta el día de la evaluación debieron haber sido notorias el día de su detención. Desde un punto de vista médico, el pronóstico del evaluado puede señalarse como favorable para la vida y bueno para la función, en la actualidad se sugiere reciba atención médica específica en el sentido terapéutico motriz para un adecuado control orgánico y sistémico de las lesiones derivadas...”. (Visible en foja 46).

47.- El mencionado documento concluye en el aspecto psicológico que “**A**” presenta: “...*Trastorno de adaptación con ansiedad. El diagnostico de los trastornos de adaptación se basa en la identificación de los factores importantes de la vida que causan estrés, tus síntomas y cómo estos afectan tu capacidad para desenvolverte. Con ansiedad: Los síntomas comprenden principalmente, nerviosismo, preocupación, sensación de agobio y dificultad para concentrarte o recordar cosas...*”. (Visible en foja 46).

48.- Aunado a lo anterior, se cuenta con el testimonio de “**O**”, quien a pesar de que no fue su deseo que la presente investigación se extendiera a ella y sus hijos (visible en foja 320), indicó que: “...*posteriormente me trasladan en la troca de color arena y se va conmigo mi bebé de brazos y mi niña de seis años a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado que se ubican en el canal y 25, al estar adentro de las instalaciones, al mucho rato, no sé cuánto tiempo, es que entraron unos hombres con mi esposo todo golpeado, de hecho traía dos abiertas en la parte baja del pómulo izquierdo, incluso traía sangre, también venía todo lleno de tierra, traía marcas de los zapatos, de la suela en sus ropas, no podía sostenerse de pie y también apenas respiraba, se oía su respiración agitada, incluso mi hija que estaba conmigo me dijo que su papi traía sangre en su cara, ella también lo vio, uno de los elementos le dijo a mi esposo que si eran las armas que traía, señalando unas armas que se encontraban ahí, y uno de los elementos codeó al otro, señalando que obvio era una acusación falsa, ahí ya no volví a ver a mi esposo, ya que también a mí me privaron de la libertad y me coaccionaron, amenazaron para que declarara y tuve que hacerlo, ya que yo temía por la integridad de mis hijas, en todo momento me decían que las iban a mandar al DIF, además de que me iban a dejar muchos años en la cárcel, estuve en un hotel en la ciudad de Chihuahua y ahí nos trataron muy mal, nos daban comida mucho muy mala, pero únicamente a mí y a mis hijas, actualmente temo por mi integridad física y la de mi familia y esta declaración la realizo con mucho temor...*”. (Visible en fojas 316 y 317).

49.- De lo transcrito, se concluye que “**A**” sí presenta lesiones que son concordantes con las violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal que manifestó haber sufrido, de igual manera, tanto el Protocolo de Estambul, como la evaluación psicológica realizada por esta Comisión, coinciden en que el impetrante se encuentra afectado emocionalmente por el proceso que refirió haber vivido al momento de su detención, sin embargo, la autoridad en los tres certificados médicos a los que tuvo acceso este organismo, manifestó lo contrario, en el certificado médico de ingreso a la Fiscalía General del Estado, la doctora “**DD**” indicó que “**A**” presentó sugilaciones y una lesión en el tobillo, debido a haberse torcido el pie al pisar mal la banqueta al llegar a esa dependencia el 27 de febrero de 2019, igualmente, en el certificado médico de egreso de fecha 1 de marzo de

2019, la misma doctora indica que “**A**” no presenta datos ni huellas de violencia física recientes, es decir, ya ni siquiera fue asentado que tuvo una contusión en el tobillo.

50.- Por último, como ya se estableció previamente, se cuenta con el certificado médico de ingreso al Centro de Reinserción Social Estatal número 1, de fecha 1 de marzo de 2019, en el que el médico pasante en servicio social “**EE**” manifestó que “**A**” no presentó evidencia de lesiones físicas recientes, sobre este certificado es conveniente hacer ciertas observaciones, la primera es que el médico pasante que realizó la revisión del quejoso, no indica su especialidad y es quien firma en el lugar del doctor “**FF**”, médico de turno del Centro de Reinserción Social Estatal número 1, la segunda observación es precisamente sobre éste último médico, pues como se establece en el Protocolo de Estambul practicado a “**A**”, “**FF**” cuenta con una cedula profesional expedida para ejercer como médico cirujano dentista (visible en foja 45), lo cual lo hace inelegible para poder certificar el estado de salud de las personas que son remitidas a dicho centro de reinserción, haciendo que dicho certificado pierda legitimidad, pues ni el titular ni el pasante acreditaron contar con las credenciales necesarias para poder evaluar el estado de salud del impetrante, lo anterior deberá hacerse del conocimiento del licenciado Emilio García Ruiz, Secretario Estatal de Seguridad Pública, para que se tomen las medidas correspondientes.

51.- Por ello, esta Comisión advierte que las lesiones antes referidas son coincidentes, al menos parcialmente, con los hechos narrados por el quejoso y “**O**” quienes afirmaron que fueron los propios agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado quienes le causaron dichas lesiones a “**A**”.

52.- Este organismo no pasa por alto el hecho de que existen múltiples contradicciones en el dicho del quejoso en lo relativo a las lesiones que manifestó haber sufrido, al momento de presentar su queja, éste indicó que: “...*me empezaron a golpear, de ahí me llevaron a una casa sin saber a dónde, primero porque no conozco esta ciudad y luego porque me taparon la cara, ahí estuve como veinte minutos o media hora y de ahí luego fueron a reventar otra casa los agentes, de ahí me llevaron a Fiscalía Zona Centro, me amenazaron con que me iban a matar al igual que a mi familia, que al cabo no me conocían, cuando fuimos a la casa que menciono que no conocía, me golpearon en las costillas, traigo mucho dolor, me dan punzadas, me siento sofocado y me falta aire al respirar, no supe con que me golpearon porque me tenían con los ojos tapados...*”.

53.- Con posterioridad, relató ante la doctora María del Socorro Reveles Castillo, al realizarle la evaluación médica para casos de posible tortura y otros tratos o penas

cruelles, inhumanos o degradantes que: *“...lo bajaron de la camioneta y le taparon la cara con su playera. En ese momento sintió un golpe en la cara que le produjo sangrado por la nariz. Lo sentaron en una silla y comenzaron a golpearlo con una tabla en las plantas de los pies, diciendo que se tenía que declarar culpable de un homicidio. También lo acostaron en el piso, boca arriba, cubierta la cara con su playera, y le echaron agua en la cara, mientras le dieron un golpe hasta que le sacaron el aire, causándole sensación de ahogamiento y le dieron toques eléctricos en los brazos con la chicharra, así como un golpe con el cañón del rifle en pierna izquierda. Lo levantaron y continuaron golpeándolo en el cuerpo. Posteriormente fueron a “reventar” otra casa y detienen a otras personas que él no conocía. Fueron trasladados a la Fiscalía Zona Centro, lo meten en una oficina y le dicen “lo que tiene que decir”, si no firmaba lo que querían los policías, le iban a hacer daño a su esposa. También comentaron: “tus derechos humanos me valen verga”. Metieron a su esposa a la oficina, la hincaron y posteriormente los llevaron a todos (él, su esposa y sus hijos) a un terreno baldío y le dijeron que como no quería agarrar la muleta, se despidiera de su familia, al cabo que nadie sabía que lo habían detenido. Nadie iba a saber que lo habían matado. Tomaron a su hija y le dijeron, que, o doblaba las manos o mataban a todos y decidió aceptar lo que le pedían, para que no maltrataran a su familia...”*.

54.- En lo concerniente a lo manifestado por **“A”** ante los peritos que elaboraron el Protocolo de Estambul, éste indicó lo siguiente: *“...me llevaron a una casa, me sentaron en una silla, me quitaron la ropa y me empezaron a pegar en las costillas y en las plantas del pie con una toalla, me tiraron al suelo y me patearon en el abdomen, yo no les aceptaba la culpa, después me sacaron al patio y me pusieron a mis hijos y a mi esposa frente a mí, los hincaron y apuntaron con un arma en la cabeza, mi hija gritaba, yo les dije que yo había hecho todo lo que ellos decían con tal que los dejaran en paz. Un tiempo después me llevaron a la Fiscalía y ahí en una oficina me hicieron declarar lo que ellos me decían, me bachoneaban cuando me equivocaba y me gritaba que tenía que hacerlo de nuevo, en una ocasión me trajeron de nuevo a mi esposa y con jalones de cabello la hincaron de nuevo frente a mí, dijeron que ella ya había confesado que yo era el líder, me llevaron a una celda y ahí me pusieron una bolsa de plástico en la cara y me pegaban en las costillas, después ya no me hicieron nada. Antes en la casa también me tiraron al suelo y me daban chicharrazos en la espalda, abdomen y testículos, me pusieron en un charco de agua y pegaban unos cables que me daban toques, cuando llegué a la Fiscalía estaba todo ensangrentado, una doctora me revisó y me preguntó que si me habían golpeado, pero ahí estaba un agente y antes me había advertido que no dijera nada si no me iba a ir peor, por lo que no le contesté nada a la doctora...”*.

55.- Por último, la declaración de “O” tampoco arroja luz sobre algunas de las declaraciones hechas por “A”, pues mientras dice que a su esposa la llevaron frente a él para hincarla y que incluso les pusieron un arma de fuego a ella y sus hijos, ésta indicó que: *“...posteriormente me trasladan en la troca de color arena y se va conmigo mi bebé de brazos y mi niña de seis años a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado que se ubican en el canal y 25, al estar adentro de las instalaciones, al mucho rato, no sé cuánto tiempo, es que entraron unos hombres con mi esposo todo golpeado, de hecho traía dos abiertas en la parte baja del pómulo izquierdo, incluso traía sangre, también venía todo lleno de tierra, traía marcas de los zapatos, de la suela en sus ropas, no podía sostenerse de pie y también apenas respiraba, se oía su respiración agitada, incluso mi hija que estaba conmigo me dijo que su papi traía sangre en su cara, ella también lo vio...”*.

56.- Es decir, de las tres declaraciones hechas por “A” que obran en el expediente de queja, se dilucida que efectivamente existieron malos tratos por parte de los elementos de la Fiscalía General del Estado y una violación al derecho a la integridad y seguridad personal, con la concomitante posibilidad de que la autoridad lo haya lesionado con la finalidad de imputarle los delitos de los que se le acusa, existiendo coincidencia en que las lesiones que manifestó haber sufrido se concentran principalmente en el lado izquierdo de su cuerpo, en las plantas de los pies, en la cara anterior del antebrazo y en las muñecas.

57.- Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que siempre que una persona es detenida en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al Estado proveer una explicación creíble de esa situación. En consecuencia, existe la presunción de considerar responsable al Estado por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales. En dicho supuesto, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.⁴

58.- En el caso en estudio, el quejoso, presentó una serie de lesiones con posterioridad a su detención, mismas que refirió, le fueron causadas por agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado, por lo que, siguiendo el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe la presunción de que los agentes le ocasionaron dichas lesiones al hoy quejoso, máxime cuando existe una valoración médica y psicológica por parte de este organismo que coincide con el Protocolo de Estambul practicado a “A”.

⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Caso Cabrera vs. México*, sentencia de 26 de noviembre de 2010, párr. 134.

59.- El derecho a la integridad y seguridad personal, es aquél que tiene toda persona a no sufrir actuaciones nocivas en su estructura corporal, sea fisonómica, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento graves, con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero.⁵

60.- Este derecho se encuentra previsto en los artículos 1, 19, último párrafo, y 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se reconoce que todas las personas son titulares de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad, por lo cual toda persona privada de su libertad debe ser tratada con dignidad.

61.- A su vez, este derecho humano es reconocido por los artículos 7 y 10.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.1 y 5.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, 3 y 5, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 2, 5, 6 y 11, de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

62.- De igual forma, el artículo 29, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece que por ningún motivo podrá restringirse ni suspenderse el derecho a la integridad personal.

63.- El derecho humano a la integridad y seguridad personal implica que cualquier persona tiene derecho a la protección de su integridad física, psicológica y a ser tratada con dignidad. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los derechos a la integridad personal y al trato digno de los detenidos están tutelados constitucional y convencionalmente y son exigibles independientemente de las causas que hayan motivado la privación de la libertad.⁶

64.- Por otra parte, de conformidad con los artículos 67 fracción IX, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los integrantes de las Instituciones Policiales, tienen la obligación de hacer uso de la fuerza pública dentro de los límites y en los casos y circunstancias que establece la misma ley en los diversos artículos 266 a 290, los que en resumen determinan que el uso de la fuerza pública, debe:

⁵ Soberanes Fernández, José Luis. *Manual para la calificación de hechos violatorios de los Derechos Humanos*. Porrúa, Segunda Edición, México, 2015, p. 225.

⁶ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis: P. LXIV/2010. Época: Novena Época. Registro: 163167. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Tomo XXXIII, Enero de 2011. Materia(s): Constitucional, Penal. Página: 26.

- I. Realizarse estrictamente en la medida que lo requiera el ejercicio de las funciones de los Integrantes de las Instituciones Policiales⁷.
- II. Ser legal, necesaria, proporcional, racional, y oportuna⁸.
- III. Utilizarse de manera que se evite la violación de derechos humanos, así como garantizar y salvaguardar la paz y el orden públicos⁹.

65.- La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala en su artículo 24 que: "...Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin: I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la Víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento...".

66.- También tenemos que de acuerdo con la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza debe ser adecuado y en proporción a la resistencia del infractor o agresión recibida, atendiendo a su intensidad, duración y magnitud, de tal manera que conforme a este principio, no deberá actuarse con todo el potencial de una unidad si las personas contra las que se usa la fuerza se encuentran en una situación cuantitativa y cualitativamente inferior, por lo que la fuerza empleada debe ser prudente y limitada, sólo para alcanzar el control y la neutralización de la agresión, de ahí que el uso de la fuerza deberá emplearse en relación directa con los medios empleados por las personas que participen en la agresión, su número y grado de hostilidad¹⁰; en tanto que lo que refiere la ley acerca del principio de racionalidad en el uso de la fuerza, implica que ésta será empleada de acuerdo a elementos objetivos y lógicos con relación a la situación hostil que se presente, a efecto de valorar el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades, tanto del sujeto a controlar como la de los propios Integrantes de las Instituciones Policiales.¹¹

67.- De igual manera, la ley mencionada en el párrafo que antecede, establece que la oportunidad en el uso de la fuerza pública tenderá a la actuación policial inmediata

⁷ Artículo 267 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

⁸ Artículo 267 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

⁹ Artículo 269, fracción II de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

¹⁰ Artículo 273 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

¹¹ Artículo 274 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

para evitar o neutralizar un daño o peligro actual o inminente, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública,¹² por lo que es prudente indicar que no es verosímil que “A” hubiera opuesto resistencia durante su detención, principalmente porque se encontraba acompañado de su familia (como quedó demostrado) y porque la autoridad no lo menciona en su parte informativo.

IV.- RESPONSABILIDAD

68.- Las violaciones a los derechos humanos por los actos y omisiones realizados por los agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado que participaron en la detención de “A”, generan una responsabilidad administrativa, al transgredirse las obligaciones previstas en los artículos 7, fracción I, V, VII, IX, y 49 fracción I, ambos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que estipula que las personas servidoras públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, actuando conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas correspondientes a su empleo, cumpliendo con sus funciones y atribuciones encomendadas, lo cual se inobservó, en los términos ya precisados en líneas precedentes.

69.- En ese orden de ideas, al incumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 9 fracción IX, XXI, XXXII del Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado y el artículo 2, sección B, fracción I de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, resulta procedente instaurar procedimiento administrativo en contra del personal adscrito a la Fiscalía General del Estado, con motivo de los hechos antes acreditados.

V.- REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO

70.- Por todo lo anterior, se determina que “A” tiene derecho a la reparación integral del daño sufrido en virtud de los hechos que motivaron el expediente en análisis, en los términos de la jurisprudencia que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con base en la obligación para el Estado de reparar las violaciones a los derechos humanos, considerando además que la responsabilidad del mismo, por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa, por lo que los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes, según lo dispuesto en los

¹² Artículo 275 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

artículos 1, párrafo tercero y 109, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 178, antepenúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

71.- Al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible al Estado, la recomendación formulada debe incluir las medidas efectivas de restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado, para lo cual el Estado deberá de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Para tal efecto, en términos de los artículos 6, 20, fracción II, 22, fracciones IV y VI, 36, fracción IV, 37, fracciones I y II y 39, de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, se deberá reparar el daño de manera integral a “**A**”, por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y que han quedado precisadas en la presente Recomendación, así como su inscripción ante el Registro Estatal de Víctimas. Debiendo tenerse como parámetro para la reparación integral del daño, lo siguiente:

a.- Medidas de rehabilitación

72.- Las medidas de rehabilitación, pretenden reparar las afectaciones físicas, psíquicas o morales que puedan ser objeto de atención médica o psicológica. Para esta finalidad, previo consentimiento de la víctima, ambas autoridades deberán brindar gratuitamente al quejoso, la atención psicológica y médica especializada que requiera, con motivo de los hechos que derivaron en la violación a sus derechos humanos acreditados ante este organismo.

b.- Medidas de satisfacción

73.- La satisfacción, como parte de la reparación integral, busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas.

74.- Este organismo derecho humanista considera, que la presente Recomendación constituye, *per se*, una forma de reparación, como medida de satisfacción.

75.- De las constancias que obran en el sumario, no se desprende que se haya iniciado procedimiento administrativo disciplinario con motivo de los hechos que nos ocupan, sino únicamente que se inició la carpeta de investigación “**R**” por el delito de tortura en perjuicio de “**A**”, la cual deberá integrarse y resolverse conforme a derecho, notificándole al agraviado el resultado.

76.- En ese sentido, las autoridades deberán agotar las diligencias necesarias para que se inicie, integre y resuelva conforme a derecho, el procedimiento administrativo que corresponda en contra de todas las personas servidoras públicas adscritas a Fiscalía General del Estado que participaron en la detención, procesamiento y revisión médica de “A”, y en su caso, se impongan las sanciones que correspondan, dependiendo del grado de participación.

c.- Medidas de no repetición

77.- Estas consisten en implementar las medidas que sean necesarias para conseguir que los hechos violatorios de derechos humanos no se repitan.

78.- En ese sentido, las autoridades deberán implementar programas de capacitación continua dirigidos a la totalidad de las y los agentes de policía adscritos a la Fiscalía General del Estado, sobre los supuestos legales, constitucionales y convencionales, para la detención de personas y prevención de la tortura, a fin de evitar que dicho personal realice actos como los analizados en la presente determinación y garantizar a la ciudadanía no ser víctima de alguna injerencia o irrupción arbitraria en sus domicilios.

79.- De igual manera, las autoridades deberán capacitar a las y los médicos que elaboran las evaluaciones médicas de ingreso y de egreso de las personas detenidas, asimismo, esta Comisión considera necesario que los formatos utilizados para describir el estado físico de las personas, sean más exhaustivos y analicen de manera más detallada a las y los detenidos.

80.- Atendiendo a los razonamientos y consideraciones antes detallados, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos estima que a la luz del sistema de protección no jurisdiccional, se desprenden evidencias para considerar violados los derechos fundamentales de “A”, específicamente el derecho a la integridad y seguridad personal. Por lo que en consecuencia, respetuosamente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como los numerales 84, fracción III, inciso a), 91, 92 y 93, del Reglamento Interno de esta Comisión resulta procedente emitir las siguientes:

VI.- RECOMENDACIONES:

A usted, **Mtro. César Augusto Peniche Espejel, Fiscal General del Estado:**

PRIMERA.- Para efecto de que dentro del límite de su competencia, se inicie, integre y resuelva conforme a derecho, procedimiento administrativo en contra de las personas servidoras públicas que participaron en los hechos motivo de la presente Recomendación.

SEGUNDA.- Para que se agoten las líneas de investigación a la brevedad posible y se resuelva conforme a derecho la carpeta de investigación “R”, notificando al impetrante el resultado de la misma.

TERCERA.- Para que gire sus instrucciones a efecto de que se proceda a la reparación integral del daño a “A”, de manera oportuna, plena y efectiva, como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos, en los términos precisados en los párrafos 70 al 78 de la presente resolución, remitiendo a este organismo pruebas de cumplimiento.

CUARTA.- Para que gire instrucciones a efecto de que en los términos de lo establecido en Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, se inscriba a “A”, en el Registro Estatal de Víctimas por violación a sus derechos humanos.

QUINTA.- Para que de acuerdo con lo establecido en el párrafo 79, se tomen las medidas necesarias para que los formatos utilizados para describir el estado físico de las personas, sean más exhaustivos y evalúen de manera más detallada a las personas detenidas.

SEXTA.- Para que gire instrucciones a fin de que se ordenen las medidas administrativas tendientes a garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos de naturaleza similar a las acontecidas en los hechos bajo análisis, por lo que en un término de tres meses a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se deberá diseñar un curso de capacitación y adiestramiento a las personas servidoras públicas que lleven a cabo detenciones, enfocado principalmente en el respeto de los derechos humanos al momento de la detención y la consignación de personas, dicha capacitación deberá ser de manera permanente y continua.

La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, primer párrafo de la Ley que rige nuestra actuación, tiene el carácter de pública y con tal carácter se divulga en la gaceta de este organismo.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, sino que, por el contrario, deben ser concebidas como instrumentos indispensables en las sociedades democráticas y en los Estados de Derecho, para lograr su fortalecimiento a través de la

legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridades y personas servidoras públicas ante la sociedad.

Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva cada vez que se logre que aquellas y éstos, sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleven el respeto a los derechos humanos.

En todo caso, una vez recibida la recomendación, la autoridad o persona servidora pública de que se trate, informará dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, si se acepta. Entregará en su caso, en otros 15 días adicionales, las pruebas correspondientes de que se ha cumplido, ello según lo establecido en el artículo 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La falta de respuesta dará lugar a que se interprete que la misma no fue aceptada. En caso de que se opte por no aceptar la presente recomendación, le solicito en los términos del artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44 de la multireferida Ley, que funde, motive y haga pública su negativa. No dudando de su buena disposición para que la presente sea aceptada y cumplida.

A T E N T A M E N T E

NÉSTOR MANUEL ARMENDÁRIZ LOYA

P R E S I D E N T E

C.c.p. Quejoso.- Para su conocimiento.

C.c.p. Lic. Jair Jesús Araiza Galarza, Secretario Técnico Ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

C.c.p. Lic. Emilio García Ruiz, Secretario Estatal de Seguridad Pública para efectos de seguimiento a lo establecido en el párrafo 50 de la presente resolución.